



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA

17 de septiembre de 2020

Proceso Nro. 2018 - 00011 – Incidente Nulidad

Auto Civil Nro. 0432

ASUNTO A RESOLVER

El Despacho resuelve el incidente de nulidad promovido por el apoderado de los herederos DEIWEN GIL CAMELO, MILENA GIL CAMELO y de la cónyuge supérstite ELIZABETH CAMELO.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El inconforme peticiona que se declare la nulidad de lo actuado a partir de la diligencia de secuestro realizada el 25 de septiembre de 2018, con fundamento en los numerales 5 y 6 del artículo 133 del C.G.P, toda vez que, no se realizó la audiencia de que trata el artículo 309 numeral 6 del C.G.P para resolver la oposición enervada durante la antedicha diligencia de secuestro.

PROBLEMA JURÍDICO

¿Resulta nulo el trámite surtido con posterioridad a la diligencia de secuestro realizada el 25 de septiembre de 2018, con fundamento en los numerales 5 y 6 del artículo 133 del C.G.P, porque la oposición a la diligencia de secuestro se resolvió mediante auto interlocutorio escrito, sin convocar a la audiencia de que trata el artículo 309 numeral 6 del C.G.P?

TESIS DEL DESPACHO

Negar la solicitud de nulidad peticionada con fundamento en los numerales 5 y 6 del artículo 133 del C.G.P, toda vez que se encuentra saneada por vía de los casos previstos en los numerales 1 y 4 del artículo 136 del C.G.P.

CONSIDERACIONES

A efectos de analizar el problema jurídico, es preciso memorar que, conforme con el artículo 133 del C.G.P numerales 5 y 6, el proceso es nulo, en todo o en parte, en los siguientes casos:

“5. cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado”.

La primera de las causales transcritas hace referencia a la reticencia del juzgador de considerar una prueba que ha sido debidamente peticionada, sea para concederla o negarla, mientras que, la segunda, prevista en el numeral 6 del artículo 133 del C.G.P implica la pretermisión total del término para alegar de conclusión. Siendo estas dos causales vicios que pueden configurar una nulidad en la actuación. Es preciso indicar desde ya que, las nulidades alegadas no están clasificadas dentro de aquellas consideradas insubsanables.

El régimen de nulidades procesales está cimentado en tres principios básicos: especialidad, protección y convalidación. El principio de especialidad o taxatividad atañe a que no hay nulidad sin ley que la prescriba, es decir, los vicios que constituyen nulidad son los enlistados en la norma abjetiva; el principio de protección consiste en la necesidad de establecer la nulidad con el fin de proteger a la parte cuyo derecho fue cercenado por causa de la irregularidad, y por último, el principio de convalidación radica en que la nulidad se entenderá saneada, salvo contadas excepciones, por virtud del consentimiento expreso o tácito del perjudicado.

Seguidamente, el artículo 136 del C.G.P enumera cuatro casos en los que la nulidad se considerará saneada, que son:

“1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó
sin proponerla.

2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.
3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa”.

En el caso de autos, la nulidad alegada quedó saneada porque la parte que podía alegarla actuó sin proponerla y porque a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa, entre otras razones como pasa a estudiarse:

El artículo 596 del C.G.P, numeral 2 indica que las oposiciones al secuestro se tramitaran según lo dispuesto para la diligencia de entrega, esto es, se aplicará lo previsto en el artículo 309 ibídem. Dentro del referido articulado se lee:

6. Cuando la diligencia haya sido practicada por el juez de conocimiento y quien solicitó la entrega haya insistido, este y el opositor, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrán solicitar pruebas que se relacionen con la oposición. Vencido dicho término, el juez convocará a audiencia en la que practicará las pruebas y resolverá lo que corresponda”

El 25 de septiembre de 2018 se llevó a cabo diligencia de secuestro. Posteriormente, mediante auto escrito adiado el 25 de octubre de 2018, el despacho resolvió acoger la oposición a la diligencia de secuestro formulada por el señor Jairo Gil y, como consecuencia de ello, ordenó levantar el embargo y secuestro que fueron consolidados sobre el inmueble objeto de la cautela identificado con Nro. de matrícula inmobiliaria 166.19408 de la oficina de registro de instrumentos públicos de La Mesa – Cundinamarca. Auto que fue notificado en estado el 26 de octubre de 2020 (fl 179 – 183).

Esta oficina judicial considera que, pese a que no se citó a la audiencia de que trata el numeral sexto del artículo 309 del C.G.P. esta circunstancia no entraña nulidad, por las siguientes razones:

Convalidación tácita o por aquiescencia:

- ✓ La parte que hoy alega la nulidad actuó sin proponerla, pues, en el cuaderno denominado “sucesión intestada – incidente objeción cuentas secuestre”, reposa escrito suyo de fecha 22 de mayo de 2019, es decir, posterior a la diligencia de secuestro del 25 de septiembre de 2018 y de la providencia del 25 de octubre de 2018. Igualmente, reposa actuación, en el cuaderno intitulado “sucesión intestada – incidente nulidad”, promovida por la misma parte iniciadora de la nulidad, inclusive, el apoderado asistió a la vista pública que se llevó a efecto el 12 de septiembre de 2019 dentro del incidente promovido para objetar las cuentas del secuestre.
- ✓ Contra la providencia del 25 de octubre de 2018 procedían los recursos de ley, fue debidamente notificada por inclusión en estado, no obstante, la parte no los propuso.

A pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa

La audiencia del numeral 6 del artículo 309 del C.G.P tiene como fin “*practicar pruebas y resolver lo que corresponda*”.

En el caso en concreto, durante la diligencia se recepciono el interrogatorio de Jairo Gil junto con los testimonios de Samuel Pineda Gallego, Bertilda Muñoz Gil y Luis Eduardo Rodríguez Naranjo, se recibieron los documentos que se enumeraron en el acta (fl. 174 – 174, C1).

Dentro de la diligencia de secuestro los intervinientes tuvieron la oportunidad de preguntar y contradecir la prueba practicada.

Transcurrió el término del numeral 6 del artículo 309 del C.G.P sin que ninguno de los intervinientes aportara documento nuevo o solicitud probatoria

diferente a la allegada el día de la diligencia de secuestro. Es decir, no había pruebas que practicar.

Ahora bien, el derecho a la defensa es entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados con los que cuentan las personas inmersas en un proceso judicial o administrativo, para preservar sus intereses y, en este sentido, puedan ser oídas, hagan valer sus razones y argumentos, controvertan, contradigan y objeten las pruebas en contra, soliciten la práctica de otras y ejerzan los recursos a que hayan lugar (T-286 de 2018).

En cuanto al *derecho de contradicción*, es un derecho que tiene énfasis en el debate probatorio, lo que implica la facultad de presentar pruebas, solicitarlas, participar en la producción de estas, “*exponer los argumentos en torno a lo que prueban los medios de prueba*” y recurrir las decisiones que no le son favorables.

Así mismo, uno de los requisitos que garantiza el derecho a la defensa es el de *tener conocimiento de la actuación surtida por la administración* el cual, se materializa por medio de las diferentes comunicaciones y notificaciones. En este sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-286 de 2018 sostuvo que:

“El derecho de defensa, puntualmente, se centra en la posibilidad de que el administrado conozca y tenga la posibilidad de hacer parte del procedimiento que lo involucra y, a partir de ahí, exponer su posición y debatir la de la entidad correspondiente por medio de los recursos y medios de control dispuestos para el efecto. (...)”

En suma, esta garantía procesal consiste, primero, en la posibilidad de que el particular, involucrado en un procedimiento o proceso adelantado por la administración, pueda ser escuchado y debatir la posición de la entidad correspondiente; segundo, presentar pruebas, solicitar la práctica de las que se considere oportuno y, de ser pertinente, participar en su producción; tercero, controvertir, por medio de argumentos y pruebas, aquellas que contra él se alleguen; cuarto, la posibilidad de interponer los recursos de ley y, quinto, la potestad de ejercer los medios de control previstos por el legislador.”

Conforme con lo anterior, el derecho a la defensa, como aspecto esencial del debido proceso, permite que toda persona inmersa en una actuación judicial o administrativa, tenga la posibilidad de hacer parte activa durante todo el proceso y, en este sentido, exponga su posición, aporte y controvierta pruebas, y haga uso de los recursos y medios de control dispuestos para el efecto.

El vicio de nulidad, en caso de existir, cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa, tampoco se pretermitió ninguna instancia, ni se le cercenó el derecho de defensa a ninguno de los intervinientes, puesto que, como se dijo anteriormente, tuvieron la oportunidad de debatir las pruebas que luego fueron cimiento de la decisión, en la que se determinó acoger la oposición por considerarla fundada. Por todo lo expuesto, se negará la solicitud de declaratoria de nulidad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA

RESUELVE:

PRIMERO: Negar la solicitud de nulidad peticionada con fundamento en los numerales 5 y 6 del artículo 133 del C.G.P, toda vez que se encuentra saneada por vía de los casos previstos en los numerales 1 y 4 del artículo 136 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE, (2)


OSCAR ANDRÉS MENJURA CUERVO

JUEZ

**JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DEL TEQUENDAMA**

EL AUTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SE NOTIFICO EN ESTADO No. 016
HOY 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 8:00 A.M.


LUIS ALBERTO CARDOZO
SECRETARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA

17 de septiembre de 2020

Proceso No. 2018-00011

Auto de Sustanciación Civil No. 0433.

En atención a que no se vislumbra actuación pendiente surge procedente, de acuerdo con el art. 501 del C. G. P., convocar a los interesados a la audiencia de inventarios y avalúos, por tanto, se;

DISPONE:

Primero: Señalar el día (30), del mes de Septiembre, del año 2020 a la hora de las (3 pm) para efectos de llevar a cabo la diligencia de inventario de bienes y avalúos de la herencia.

Segundo: Se insta a los apoderados de la partes para que en desarrollo de la referida diligencia presenten los inventarios y avalúos, especificando los bienes con la mayor precisión, teniendo en cuenta que el avalúo de los bienes relictos debe ajustarse a lo previsto en el numeral 4° del art. 444 del C. G. P.

La audiencia se llevara a cabo de manera virtual.

NOTIFÍQUESE, (2)


OSCAR ANDRÉS MENJURA CUERVO
JUEZ

JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DEL TEQUENDAMA

EL AUTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SE NOTIFICO EN ESTADO No. 016
HOY 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 8:00 A.M.


LUIS ALBERTO CARDOZO
SECRETARIO